



Trabajo Final de Graduación

El encubrimiento de la relación laboral bajo la figura de locación de servicios

“Zechner, Evelina Margarita c/ Centro de Educación Medica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirino s/despido”

Carrera: Abogacía

Alumno: Cruz Jerónimo Kalenberg

Legajo: VABG47050

D.N.I N.º 37.894.615

Producto Seleccionado: Nota Fallo

Temática elegida: Derechos fundamentales en el mundo del Trabajo. futuro y presente del derecho del Trabajo

Módulo de cursado: Modulo 4

Tutor de la Materia: Descalzo Vanesa

Fecha de entrega: 4/7/2021

Sumario: I. Introducción – II. Plataforma fáctica e historia Procesal y resolución del tribunal – III. Análisis de la ratio Decidendi de la sentencia – IV. Descripción del análisis conceptual, antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales –V. Postura del Autor–VI. Conclusión – VII. Referencias Bibliográficas

I. Introducción

El fraude laboral que comete un empleador al contratar bajo la forma de la locación de servicio sea que ya esté inscripto en el monotributo o lo haga inscribir con dicha figura, cuando en realidad es un empleado en relación de dependencia es una modalidad muy común actualmente, y que adquiere gran relevancia. El principal derecho que se viola cuando se cometen estos actos de mala fe, es el derecho del trabajo y de la seguridad social, contemplado en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina. En el mismo se menciona que el trabajador gozará de la protección de las leyes, haciendo referencia al resguardo de la persona más vulnerable en una relación laboral, el empleado. La pasividad de este último surge porque ante la amenaza de ver coartada la posibilidad laboral, acepta tales desventajosas condiciones, lo que motiva el aprovechamiento fraudulento por parte del empleador.

En el fallo que se analizara “Zechner, Evelina Margarita c/ Centro de Educación Medica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirino s/despido”, es de suma relevancia ya que se observa la mencionada problemática. Esto es que el empleador, vulnerando normas jurídicas de orden público, mediante el fraude, busca encubrir una relación laboral en dependencia, bajo un contrato de locación de servicios. Esto, al decir de Bocchio (2012), se traduce como una forma de simulación tendiente a evitar el cumplimiento de normas imperativas sin tener sanciones, creando un “velo” con el fin de ocultar una relación laboral bajo otro tipo de contratos de carácter civil o comercial, los cuales no son alcanzados por grandes sanciones de la ley laboral.

Que, por otro lado, dicho argumento esta sostenido en el artículo 142 de la Ley de Contrato de Trabajo, el cual reza que se sanciona con nulidad el fraude laboral, al consignar que los contratos son nulos si las partes actuaron con simulación o fraude, generando la afectación del principio de supremacía de la realidad.

Como se observa, esta temática se enmarca en el ámbito del derecho laboral, el cual elabora una serie de principios que buscan proteger la parte más débil de la relación

entablada, es decir el trabajador; como una manera de acortar la brecha existente entre empleador, quien posee recursos suficientes que le permiten imponer condiciones, y el empleado, quien acepta tales condiciones.

En el fallo analizado se presenta un problema de prueba, el cual se manifiesta en la omisión por parte del *a quo* de considerar extremos probatorios relevantes a la hora de establecer si la presunción del artículo 23 de la ley 20.744 fue desvirtuada o no. Según las pruebas arrojadas al proceso, diversas circunstancias probatorias dan cuenta de una ausencia de vínculo laboral y que se trata de una típica prestación médica autónoma.

Justifica esta afirmación, lo expuesto por (Moeremans, 2015), ya que le mismo define a este tipo de contratos como un negocio jurídico que tiene como prestación característica o nuclear un hacer inmaterial, económicamente relevante en el mercado, que puede incluir obligaciones secundarias de dar por la creación o entrega de un bien material y que puede ser oneroso directa o indirectamente o gratuito. Que, por otro lado, en consonancia con el mencionado autor, (Grisolía, 2011) afirma que Esta figura se utiliza con frecuencia para encubrir una relación laboral, a los fines de eludir las obligaciones derivadas de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto es lo que se denomina —fraude o simulación laboral

II. Reconstrucción de la premisa fáctica, historia procesal y decisión del tribunal

La empresa CEMIC El Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno” (CEMIC) es una Asociación Civil sin fines de lucro, Entidad de Bien Público y Universitaria. La misma nació en 1958, con el fin de mejorar la medicina y lo referente al área de la salud. Con este objetivo, la misma cuenta con un plantel de profesionales especializados en las distintas áreas de la salud.

De lo expuesto, la Actora Evelina Zechner, como parte del plantel médico del reconocido centro mencionado *ut supra*, y, ante un despido incausado, la misma presenta una demanda en contra de su empleador, acción judicial declarada procedente por la magistrada de primera instancia. La misma funda su argumento en que de la prueba deducida por las partes, se constata la vulneración del artículo 14 bis de la Carta Magna, así como también, torna operativa la presunción del artículo 23 de la Ley 20.744, Ley de Contrato de Trabajo.

Contra tal decisorio, la parte demandada deduce recurso de apelación en la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones, la cual confirma la condena del tribunal *a quo*, basando su argumento en la operatividad de presunción del artículo 23 de la Ley 20.744, así como también en la acreditación de la relación laboral, la cual dice el sentenciante se desprende de las declaraciones testimoniales obrantes en la causa, mediante las cuales se afirma que la actora concurría diariamente a las distintas sedes del centro médico CEMIC, así como también que, por disposición del mismo, la actora debía cobrar por medio de facturas y, en caso de necesitar vacaciones, debía elevar una nota a su superior directo.

En dicha oportunidad la demandada manifiesta que las partes se comportaron en el marco de una locación de servicios, siendo que la actora alquilaba sus consultorios, así como concurriría en igual manera, es decir, de forma independiente sin dar mayores explicaciones, expone prueba pericial respecto del alquiler argumentado.

Ante tal decisión, la demandada presenta un recurso extraordinario, cuya denegación motiva en un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde, la parte demandada funda su petición en que la cámara de instancia inferior, omite confirmar si el art. 23 de la Ley 20.744 ha sido desvirtuada o no, en igual manera, siendo todo lo contrario, aduce que el hecho de que la profesional brinde servicios para la demandada, activa dicha presunción, omitiendo elementos valorativos que podrían probar lo contrario. Esto es apoyado en que la pericia contable demuestra que la actora percibía sumas salariales variadas en concepto de los servicios brindados para el en nosocomio.

A todo esto, la actora expresa que también de la misma pericia de vislumbra el pago por quirófano, el cual es utilizado necesariamente para brindar los servicios para el empleador, argumento que procede en su favor. Dicho argumento, se sustenta en que de la declaración de los testigos y, además de la confirmación de la prestadora medica OSDE, se desprende que, en el domicilio de la actora, además de coincidir con el consultorio de otro profesional, es el consultorio particular de la misma, siendo que la entidad mencionada prestadora de salud, la reconoce como profesional habilitada en la cartilla médica. Todas estas circunstancias que la Cámara omite evaluar para establecer si la presunción opera o no.

Por la misma razón que se acaba de exponer, la cámara también debió evaluar si la elevación de notas al jefe de servicio de oftalmología de la demandada comunicando

cuándo cada profesional médico se tomaría su descanso, así como el hecho de que aquel sería quien confeccionaba la grilla con los horarios de atención a pacientes, eran elementos que constituían una genuina manifestación del ejercicio de poder de dirección patronal o si, en cambio, eran consecuencia necesaria de la organización y funcionamiento del sistema médico asistencial en el que la coordinación de horarios responde a razones operativas.

En base a lo expuesto es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictamina descalificar la sentencia recurrida, entendiendo que lo resuelto por el tribunal *a quo* no se apoya en una valoración suficiente de los distintos elementos incorporados al proceso. Deja sin efecto la sentencia apelada y ordena vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo expresado.

Sin embargo, este fallo es controversial dentro de la misma corte, pues los magistrados Highton de Nolasco, Lorenzetti y Rosenkrantz votan en línea con lo ya expresado, pero los jueces Maqueda y Rosatti votan en disidencia, entendiendo que según el dictamen del procurador la relación laboral dependiente se habría acreditado a partir de las presunciones de las pruebas rendidas.

III. Análisis de la *ratio decidendi*

Dado el voto en disidencia primero se analiza la postura de los Dres. Highton de Nolasco, Rosenkrantz y Lorenzetti, cuya postura es a favor de dar curso al recurso extraordinario y anular la sentencia apelada.

Para así decidir, los magistrados entienden que el tribunal *a quo* no examinó si las manifestaciones respecto de la necesidad de informar a la demandada sobre su descanso vacacional constituían una genuina manifestación del ejercicio del poder de dirección patronal o si, en cambio, eran consecuencia necesaria de la organización y funcionamiento del sistema médico-asistencial en el que la coordinación de horarios responde a razones operativas, y que fueron compartidas por la reclamante sin que, por ello, precisamente, se altere la naturaleza autónoma de los servicios comprometidos.

Agregan que la cámara ignoró, varias circunstancias debidamente acreditadas de las que puede inferirse, razonablemente, que la accionante no realizaba dichas prestaciones en favor del CEMIC a cambio de una remuneración. Al respecto esgrime

que el informe pericial contenido en autos contiene conceptos referidos a alquiler de consultorios, extremo que acreditaría la naturaleza de prestación de servicios del contrato. Esto es así pues el pago de ese alquiler es una circunstancia que impide concluir, a menos que se brinde un fundamento adicional que la cámara no suministró, que la profesional realizaba las prestaciones en favor del CEMIC a cambio de una remuneración y, por ende, que estaba inserta en una organización ajena. Por ello la circunstancia mencionada no debió ser ignorada por la cámara a la hora de formarse un juicio acabado sobre si la presunción fue rebatida y, en definitiva, acerca de la verdadera índole jurídica de la prestación.

Además, agregan que la emisión de facturas no correlativas como profesional autónoma registrada, el vínculo con la clínica desarrollado durante muchísimos años sin reclamo alguno y la existencia de una práctica profesional independiente con la consiguiente falta de exclusividad, no es, por sí sola, demostrativa de la existencia de una relación autónoma. Pero la cámara debió evaluar dichas circunstancias conjuntamente con el hecho de que la actora pagaba un alquiler por el uso de las instalaciones del CEMIC a la hora de establecer si la presunción fue rebatida.

Así como también evaluaron que en la registración figura como domicilio fiscal, el que coincide con el medico oftalmólogo, el cual consta actas que el mismo era uno de los profesionales que también prestaba servicios en el CEMIC. Además, se agrega, que, de la declaración de varios testigos, se constata que, en el domicilio en cuestión, se encontraba el consultorio particular de la actora.

Por último, en virtud de lo expuesto, La Suprema Corte, debió analizar la elevación de notas al jefe de servicios de oftalmología, siendo que este confeccionaba las grillas horarias, siendo también el superior al que se le debía comunicar cuando los profesionales se tomaban su descanso

Por lo cual concluyen que, de las circunstancias mencionadas, es decir de la emisión de facturas, del vínculo desarrollado con el empleador durante muchos años, así como también de la existencia de la practica profesional independiente, no constituye razón suficiente para probar el vínculo laboral

Por ello descalifican la sentencia recurrida declarando procedente el recurso para que vuelva a dictarse sentencia.

A su turno, los Dres. Maqueda y Rosatti votan en disidencia a sus colegas preopinantes, basados en el dictamen de la procuradora, el cual afirma que la demandada no demostró de manera suficiente que el fallo apelado no constituya una aplicación razonada del derecho vigente a las circunstancias comprobadas de la causa, por lo que deba ser dejado sin efecto en virtud de la doctrina de la arbitrariedad, resolviendo así rechazar el recurso.

Así las cosas, con voto mayoritario la Corte Suprema de Justicia, dar curso al recurso interpuesto que motiva la queja en análisis, y que se deje sin efecto la sentencia apelada. Se ordena vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo expresado.

IV. Análisis doctrinario y jurisprudencial

Luego de analizar el fallo, el problema jurídico devenido es de carácter probatorio el cual se manifiesta en la omisión por parte del *a quo* de considerar extremos probatorios relevantes a la hora de establecer si la presunción del artículo 23 de la ley 20.744 fue desvirtuada o no.

En relación a lo expuesto, abordando la carga procesal como deber probatorio, se vislumbra un accionar pertinente por parte de La Corte Suprema, ya que, según lo argüido por el mismo en el presente fallo y, al decir de Cisneros (2000), La ley entiende que una de las partes está en inferioridad fáctica y por ello establece incentivos cuya finalidad es lograr la igualdad. Este incentivo es la carga que se impone a una de las partes, de modo que, sin obligarla, se le dice que si no la cumple perderá el beneficio. Así, la carga probatoria alienta a una de las partes a arrimar al proceso una prueba que normalmente tiene en su poder o a su alcance. Es menester mencionar que en concordancia con mencionado *ut supra*, el Tribunal Supremo funda su argumento en que el incumplimiento de esa carga acarrea la pérdida del beneficio, esto es, considerar el hecho como no probado.

De lo expuesto, se observa que, según Grisolia (2011), en lo atinente al trabajo autónomo y su relación con la locación de servicios, la autonomía, por oposición a la dependencia, se define por la autoorganización del trabajo. Esto es que, el trabajador

autónomo no se incorpora a la organización de un tercero (el acreedor de las obras o de los servicios) y como consecuencia asume los riesgos de su actividad. Por ello, no celebran contrato de trabajo quienes realizan tareas en utilidad patrimonial propia (y no por cuenta ajena) y organizan su propio trabajo.

De lo antedicho se vislumbra que la autonomía se define, sobre todo, por la concurrencia de dos requisitos, por un lado, la organización del trabajo por el propio trabajador o empresario y, por el otro, la asunción del riesgo por el trabajador mismo, al cual quedan transferidas las consecuencias de su actividad.

De esta manera, abordando la presunción operativa de la Ley 20.744 de Contrato de trabajo, es necesario además también la mencionar la distinción entre un el trabajo autónomo respecto de la locación de servicios. Esto es que, Si bien el trabajador autónomo, conforme la interpretación que renombrados juristas realizan de la normativa vigente en la materia, celebra un contrato de locación de servicios o de obra según la actividad que desempeña, no todas las personas que celebran este tipo de contratos pueden considerarse trabajadores autónomos. Ello, por cuanto el trabajo autónomo se caracteriza por ser una actividad que tiene como propósito la obtención de medios de subsistencia sin un vínculo de subordinación. Es decir, que la celebración ocasional de un contrato de locación de servicios o de obra no permite presumir que el prestador o contratista en este contrato es un trabajador autónomo, quien celebra este tipo de contratos de forma habitual.

Lo que al decir de Moeremans (2015), Cuando nos encontramos frente a un prestador profesional de bienes y servicios que celebra un contrato con un individuo que realiza el negocio para beneficio propio o de su grupo familiar o social, el contrato también será de consumo y, por ende, deberá regirse principalmente por la normativa de orden público en la materia.

De lo expuesto, el Supremo tribunal concluye que, para la doctrina y la jurisprudencia, resulta suficiente acreditar la prestación de servicios para tornar operativa la presunción. Al decir de Dalinger (2013), lo mencionado resulta aún más evidente, sobre todo, tratándose de una presunción iuris tantum que si bien, la misma puede verse desvirtuada mediante la producción de prueba que determine que efectivamente la prestación de servicios no tiene como causa un contrato de trabajo, se

destaca que el centro médico en cuestión, pudo hacerlo y no lo hizo, dejando operativa la misma

V. Postura del autor

El fallo en análisis es un precedente fundamental a nivel Nacional, ya que se demostró que muchas veces el formalismo con el que se interpreta la ley, resulta causante de un perjuicio tutelado en diversas leyes, así como también en la Constitución Nacional, como lo son los tan preciados derechos del trabajador.

Esto es en relación a que la Corte Suprema procedió a analizar el derecho del trabajo, en tanto rama legal de neto carácter protectorio del sujeto más débil en la relación de tipo laboral. Esto es en relación a que los principios del derecho laboral son aquellas directivas que orientan la interpretación y aplicación de las normas laborales. En la materia objeto del presente fallo, y tal como se ha podido observar a través del análisis jurisprudencial efectuado, Este autor entiende y adhiere al decisorio de la Corte Suprema, el cual prioriza el principio de primacía de la realidad es que el que define la existencia o no de una relación de dependencia.

Por otro lado, este autor adhiere al criterio de la corte, en cuanto a que se ha logrado delimitar en qué casos y bajo qué supuestos se puede utilizar la figura de locación de servicios, y qué lugar corresponde la figura de relación de dependencia. Esto implica, en principio, tener en cuenta aspectos relativos a la forma en qué se desempeña la tarea o función realizada. Para esto, es necesario que el empleador sea quien demuestre la no existencia de la relación laboral, dado que la carga de la prueba tiene características particulares en estos casos (como lo establece el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo).

En relación a lo expuesto por los magistrados, este autor enriende y adhiere respecto del breve estudio en cuanto a la figura del monotributo, efectuado por el tribunal, entendiendo que la misma suele ser la figura impositiva utilizada por los locadores de servicios o trabajadores autónomos, y, a la vez, suele también ser aplicada por los empleadores que obligan a su trabajador a inscribirse dentro de tal categoría impositiva a los fines de evadir los deberes de la seguridad social.

Por último, este autor destaca asertivo el accionar de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a los indicios que pueden determinar o presumir la existencia de la relación laboral. Esto es en cuanto a que se ha podido observar cómo la jurisprudencia, ha indicado en muchos casos, la provisión de material para el desempeño de la función, así como el hecho que esa prestación de servicio sea la única que el trabajador realiza para fundamentar una relación de dependencia laboral.

VI. Conclusión

En la sentencia analizada se destaca el fraude a la LCT mediante la utilización de la locación de servicios o de obra se da en trabajos de todo tipo (profesionales y no profesionales, universitarios o no).

Este autor adhiere en lo referente a que la Corte Suprema de Justicia buscó desentrañar la naturaleza jurídica de la relación que vinculaba a los actores y demandados, para así decidir si se trataba de un trabajo en relación de dependencia, regido por la LCT o una locación de servicios, en función de un trabajo profesional independiente, regido por el Código Civil y Comercial.

Por otro lado, este autor entiende que este fallo contribuye a que hoy en día la doctrina y la jurisprudencia sean uniformes respecto de los caracteres de una relación de dependencia, las cuales son la existencia de la subordinación jurídica, técnica y económica. En relación a lo antedicho, se debe tener en cuenta que siempre que las características del caso así lo permitieron, el obrar de los magistrados ha sido tendiente a la aplicación de manera acabada de la LCT.

Asimismo, este autor destaca y adhiere respecto del accionar de los magistrados, los cuales priorizan el carácter de irrenunciabilidad de los derechos laborales de orden público. Cabe destacar que, incluso en el caso de que expresamente el trabajador decida aceptar trabajar bajo condiciones inferiores, en términos de contratación y derechos protectores, eso no invalidó que la justicia reconozca cada uno de los derechos que corresponde sean reconocidos de acuerdo a las prestaciones laborales concretadas.

A modo de cierre, cabe destacar que, en lo respectivo a la determinación de los magistrados, la presunción del artículo 23 de la LCT, adopto una posición muy importante, esto es que la misma se encuentra presente en todos los análisis. La

mencionada presunción, consistente en que cuando el hecho de la prestación de servicios es reconocido por el demandado hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo, dice expresamente la norma, que, por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario.

VII. Listado tentativo de referencias bibliográficas

Doctrina

Bocchio, A. (2012). *El Uso del Monotributo y el Fraude Laboral*. Bs.As. Unicen Cemic. (s.f). *Centro Médico Asistencial*. Recuperado de <https://www.cemic.edu.ar/institucional.php>

Grisolia, J. (2011). *Tratado de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social*. 3° Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires.

Grona, D. (19). *Contrato de Trabajo*. Ed. La Ley. Buenos Aires

Josserand, L. (2018). *Móviles en los Actos Jurídicos del Derecho Privado*. Oejnik. España.

Moeremans, D. (2015). *Contrato de Obra y de Servicios en el Código Civil y Comercial*. Ed. La Ley. Buenos Aires

Legislación

Constitución de la Nación Argentina [Const.]. (1994)

Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. (13 de mayo de 1976). Régimen de contrato de Trabajo. [Ley 20.744 de 1976]

Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. (01 de octubre de 2014). Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. [Ley 26994 de 2014]

Jurisprudencia

Corte Suprema de Justicia de la Nación. (24 de abril de 2018). CSJ 156/2011 - recurso de hecho Zechner, Evelina Margarita c/ Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirino s/despido

Corte Suprema de Justicia de la Nación. (3 de agosto de 1998). Greco, Héctor c. Consultas SA y otros/despido



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, *5 de noviembre de 2019*

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Zechner, Evelina Margarita c/ Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno s/ despido", para decidir sobre su procedencia.

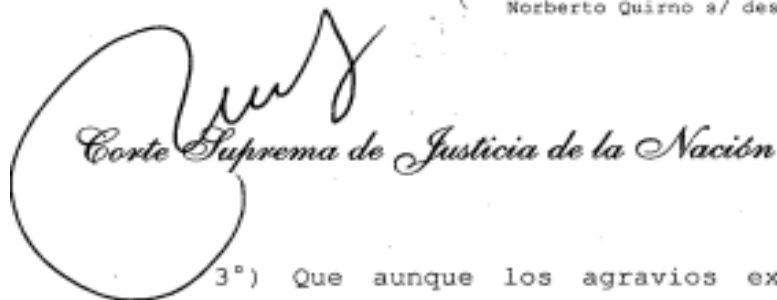
Considerando:

1º) Que contra la sentencia de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (fs. 786/794 de los autos principales, foliatura a la que se hará referencia en lo sucesivo), que confirmó la condena dictada por la señora jueza de primera instancia contra el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno -en adelante, CEMIC- (fs. 514/516), este último dedujo el recurso extraordinario (fs. 859/877) cuya denegación motivó la presente queja.

La cámara tuvo por acreditado que la prestación de la actora, de profesión médica oftalmóloga, tuvo lugar bajo una relación laboral dependiente. Para así decidir, consideró aplicable la presunción del artículo 23 de la ley 20.744 y desestimó la defensa planteada por el centro médico acerca del carácter no laboral del vínculo que existió entre las partes. Destacó que, según se desprende de las declaraciones testimoniales, la actora concurría en forma regular a las diferentes sedes del CEMIC para la atención de sus afiliados de acuerdo a los turnos asignados, que por imposición del empleador cobraba por medio de facturas y que debía elevar notas a su jefe inmediato a los efectos de comunicarle cuándo se tomaría su descanso vacacional. Señaló que los días de vacaciones por año

dependían de la antigüedad de cada profesional, que cada médico seleccionaba el horario conforme grilla que prefijaba el jefe del servicio y que podían modificarse por la actividad docente que la actora debía cumplir en la facultad de la demandada. Concluyó que la profesional médica estaba inserta en el establecimiento de la accionada.

2°) Que en su apelación extraordinaria y con sustento en la doctrina de la arbitrariedad, el CEMIC cuestiona esa decisión judicial. Afirma que la cámara no dio un adecuado tratamiento a diversas circunstancias que obstaban al encuadramiento del vínculo bajo una relación de dependencia. Asevera que, además, la cámara tergiversó los dichos de los testigos. Hace hincapié en que durante 23 años las partes se comportaron en el marco de una locación de servicio, verdadera naturaleza de la vinculación. Manifiesta que los juzgadores no tuvieron en cuenta que la actora alquilaba los consultorios del CEMIC, que cobraba honorarios y emitía facturas por ese concepto como profesional independiente y que los cobros no eran periódicos ni iguales pues variaban en función de la cantidad de prestaciones que realizaba. Sostiene que la actora determinaba los días y horarios de atención, y podía tomarse vacaciones y suspender la atención en las diferentes sedes del CEMIC a las que concurría cuando así lo solicitara, sin pedir autorización y sin dar mayores explicaciones. Por otra parte, señala que la demandante atendía en un consultorio particular. Invoca la vulneración de las garantías de debido proceso legal, de defensa en juicio y de su derecho de propiedad.



3°) Que aunque los agravios expresados remiten al examen de una materia de hecho, prueba y derecho común como es la atinente a la existencia o inexistencia de relación laboral entre las partes, regularmente ajena a la instancia extraordinaria, cabe hacer excepción a ese principio cuando, como ocurre en el caso, el tribunal a quo no ha dado un tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo con las constancias de la causa (Fallos: 312:683; 315:2514; 323:2314; 326:3043, entre muchos otros).

4°) Que la contratación de profesionales para la atención médica, sea que se trate de profesionales autónomos o dependientes, tiene como punto en común la prestación de servicios. Por esa razón, esta Corte ha advertido a los jueces que deben estudiar en forma minuciosa las características de la relación existente entre el profesional médico y la institución hospitalaria a los efectos de dar una correcta solución al litigio (Fallos: 323:2314; 341:427).

5°) Que la sentencia impugnada no ha satisfecho ese estándar. Ha omitido la consideración de extremos probatorios relevantes a la hora de establecer si la presunción del artículo 23 de la ley 20.744 ha sido desvirtuada.

6°) Que, en efecto, la cámara sostuvo que la prestación que activó la presunción consistió en la provisión de servicios profesionales por parte de la actora como oftalmóloga en intervenciones quirúrgicas y en consultas a pacientes. La cámara ignoró, sin embargo, varias circunstancias debidamente acreditadas de las que puede inferirse, razonablemente, que la accionante no realizaba dichas prestaciones en favor del CEMIC a

cambio de una remuneración (artículos 4° y 22 de la ley 20.744).

En efecto, en el informe pericial producido en autos, en la porción que alude a "Detalle de pagos, conceptos facturados y descuentos", el perito consigna ítems como "Alquiler Saavedra", "Alquiler Talcahuano" y "Alquiler Belgrano" con motivo del uso que la actora hacía de los consultorios para la atención de pacientes en dichas sedes del CEMIC. Según declaró el testigo Miguel Lizzano, el importe de ese alquiler era variable en razón de las horas de consultorio que tomaba la médica (fs. 455). El mencionado peritaje contable permite verificar que bajo la misma modalidad de liquidación la demandada percibía una suma variable en concepto de "Derecho de quirófano" en función de la cantidad de veces que la actora requería su uso para intervenir quirúrgicamente en la sede Saavedra del CEMIC a pacientes particulares.

El pago de ese alquiler es una circunstancia que impide concluir, a menos que se brinde un fundamento adicional que la cámara no suministró, que la profesional realizaba las prestaciones en favor del CEMIC a cambio de una remuneración y, por ende, que estaba inserta en una organización ajena. Quien paga un alquiler para prestar servicios lo hace con dinero propio y de ello puede inferirse, razonablemente, que prestará servicios a un tercero, distinto del titular del inmueble, a cambio de dinero para obtener una ganancia. Se trata de una típica prestación autónoma. Por lo demás, debe destacarse que, a diferencia de lo que sucede con otras alegaciones de la actora, en momento alguno se ha dicho que la modalidad de pago del alquiler por derecho de quirófano haya sido una modalidad

RECURSO DE HECHO

Zechner, Evelina Margarita c/ Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno s/ despido.


Corte Suprema de Justicia de la Nación

impuesta por CEMIC para encubrir la relación. El pago de dicho canon ha sido admitido por la accionante (fs. 14 y 553).

La circunstancia mencionada no debió ser ignorada por la cámara a la hora de formarse un juicio acabado sobre si la presunción fue rebatida y, en definitiva, acerca de la verdadera índole jurídica de la prestación (Fallos: 323:2314).

7°) Que, por lo demás, el pago del alquiler tiene un impacto directo en el modo de valorar otros extremos probatorios, aspecto que la cámara también ignoró.

El informe pericial detalló las facturas emitidas por la actora (desde el 23 de julio de 1999 hasta el 30 de octubre de 2008) correspondientes a las órdenes de pago liquidadas por el CEMIC, observándose que en algunos meses llegaba a facturar hasta en tres ocasiones a la demandada; en todos los casos, los importes facturados difieren y la numeración de los recibos, de acuerdo con los datos volcados por el perito, no es correlativa (ver Anexo I, fs. 448/450). Esta mecánica de pago se ve corroborada por el testigo Juan Pablo Aldecoa -propuesto por la accionante-, quien también se había desempeñado como médico oftalmólogo en el CEMIC y que declaró que concurría con su talonario de facturas a una sede administrativa de la aquí demandada, y contra la entrega de una de ellas se abonaban sus honorarios (fs. 398; y en sentido similar se manifestó la testigo Nora Merschon Sánchez -fs. 396-). La actora estaba también registrada desde enero de 1984 en el régimen de trabajadores autónomos (fs. 221) y es un hecho no negado que desarrolló la actividad del modo descripto durante más de veinte años.

Por otra parte, en la registraci3n figura como domicilio fiscal el de la calle Juncal 2345 piso 2 de esta Ciudad Aut3noma de Buenos Aires, que coincide con el del m3dico oftalm3logo Jorge Eduardo Acosta -seg3n consta en el escrito de la actora de fs. 309 vta.-, quien era uno de los profesionales que tambi3n operaban en la sede Saavedra del CEMIC (fs. 14). Con arreglo a la declaraci3n de varios testigos, en ese domicilio se encontraba el consultorio particular de la actora (fs. 397 y 441), cuya existencia no fue desconocida por esta (conf. fs. 552). Adem3s, la empresa de medicina prepaga OSDE Binario inform3 que "Evelina Zechner es prestadora de esta instituci3n desde el 4/5/98 en la especialidad oftalmolog3a" (fs. 382). Galeno Argentina, por su parte, contest3 que la actora "se encuentra dentro de nuestra cartilla de prestadores, con vigencia el d3a 19/9/1988 hasta la actualidad" (fs. 389).

Cada una de las circunstancias mencionadas (emisi3n de facturas no correlativas como profesional aut3noma registrada, un v3nculo con la cl3nica desarrollado durante much3simos a3os sin reclamo alguno y la existencia de una pr3ctica profesional independiente con la consiguiente falta de exclusividad) no es, por s3 sola, demostrativa de la existencia de una relaci3n aut3noma. Pero la c3mara debi3 evaluar dichas circunstancias conjuntamente con el hecho de que la actora pagaba un alquiler por el uso de las instalaciones del CEMIC a la hora de establecer si la presunci3n fue rebatida.

Por la misma raz3n que se acaba de exponer, la c3mara tambi3n debi3 evaluar si la elevaci3n de notas al jefe de servicio de oftalmolog3a de la demandada comunicando cu3ndo cada

Corte Suprema de Justicia de la Nación

profesional médico se tomaría su descanso, así como el hecho de que aquel sería quien confeccionaba la grilla con los horarios de atención a pacientes, eran elementos que constituían una genuina manifestación del ejercicio de poder de dirección patronal o si, en cambio, eran consecuencia necesaria de la organización y funcionamiento del sistema médico asistencial en el que la coordinación de horarios responde a razones operativas (conf. Fallos: 323:2314 y 326:3043).

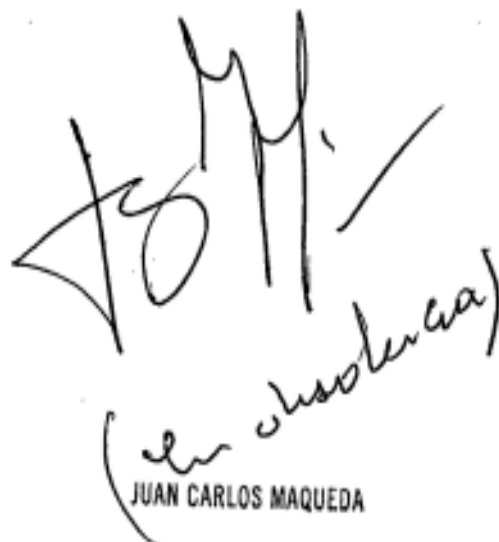
8°) Que, por lo expuesto, corresponde descalificar la sentencia recurrida. Lo resuelto por el tribunal a quo no se apoya en una valoración suficiente de los distintos elementos incorporados al proceso (Fallos: 312:184, entre otros) y no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 319:1867), de modo que medie nexo directo e inmediato con los derechos constitucionales que se invocan como vulnerados (artículo 15 de la ley 48).

Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal subrogante, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Con costas. Agréguese la queja al principal.

-//-

-// -Reintégrese el depósito de fs. 110. Notifíquese y, oportunamente, remítase.


CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ


(en concurrencia)
JUAN CARLOS MAQUEDA


POR SU VOTO
RICARDO LUIS LORENZETTI


SU DISIDENCIA
HORACIO ROSATTI


ELENA I. HIGHTON de NOLASCO

VO-// -



Corte Suprema de Justicia de la Nación

//-TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON RICARDO LUIS LORENZETTI

Considerando:

1º) Que contra la sentencia de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (fs. 786/794 de los autos principales, foliatura a la que se hará referencia en lo sucesivo) que confirmó la condena dictada por la señora jueza de primera instancia contra el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno –en adelante, CEMIC– (fs. 514/516), este último dedujo el recurso extraordinario (fs. 859/877) cuya denegación motivó la presente queja.

El tribunal a quo tuvo por acreditado que la actora, de profesión médica oftalmóloga, se había desempeñado como dependiente de la demandada y desestimó la defensa planteada por el centro médico acerca del carácter no laboral del vínculo que existió entre las partes. Destacó que, según se desprendía de las declaraciones testimoniales, la actora concurría en forma regular a las diferentes sedes del CEMIC para la atención de sus afiliados de acuerdo a los turnos asignados; que por imposición del empleador cobraba por medio de facturas y debía elevar notas a su jefe inmediato a los efectos de comunicarle cuándo se tomaría su descanso vacacional; que los días de vacaciones por año dependían de la antigüedad de cada profesional; que cada médico seleccionaba el horario conforme grilla que prefijaba el jefe del servicio y que podían modificarse por la actividad docente que la actora debía cumplir en la facultad de la demandada. Concluyó que la profesional médica estaba inserta en el establecimiento de la accionada.

2°) Que en su apelación extraordinaria, y con sustento en la doctrina de la arbitrariedad, el CEMIC cuestiona esa decisión judicial. Afirma que el tribunal *a quo* no dio un adecuado tratamiento a diversas circunstancias que obstaban al encuadramiento del vínculo bajo una relación de dependencia. Asevera que, además, aquel tergiversó los dichos de los testigos. Hace hincapié en que durante 23 años las partes se comportaron en el marco de una locación de servicio, verdadera naturaleza de la vinculación. Manifiesta que los juzgadores no tuvieron en cuenta que la actora alquilaba los consultorios del CEMIC, que cobraba honorarios y emitía facturas por ese concepto como profesional independiente; y que los cobros no eran periódicos ni iguales pues variaban en función de la cantidad de prestaciones que realizaba. Sostiene que la actora determinaba los días y horarios de atención, y podía tomarse vacaciones y suspender la atención en las diferentes sedes del CEMIC a las que concurría cuando así lo solicitara, sin pedir autorización y sin dar mayores explicaciones. Por otra parte, señala que la demandante atendía en un consultorio particular. Invoca la vulneración de las garantías de debido proceso legal, de defensa en juicio y de su derecho de propiedad.

3°) Que aunque los agravios expresados remiten al examen de una materia de hecho, prueba y derecho común como es la atinente a la existencia o inexistencia de relación laboral entre las partes, regularmente ajena a la instancia extraordinaria, cabe hacer excepción a ese principio cuando, como ocurre en el caso, el tribunal *a quo* no ha dado un tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo con las constancias de la causa y la normativa aplicable, y la decisión



Corte Suprema de Justicia de la Nación

se apoya en afirmaciones dogmáticas que le dan un fundamento solo aparente (Fallos: 312:683; 315:2514; 323:2314; 326:3043, entre muchos otros).

4°) Que, a los fines de tener por configurado el supuesto de hecho de la norma que habilita la presunción de la relación de trabajo invocada por la actora, el tribunal a quo efectuó una valoración meramente parcial de la prueba e ignoró el contexto en que se desarrolló la prestación. Así aplicó la legislación laboral a un supuesto de hecho para el que no ha sido prevista y omitió analizarlo debidamente a la luz de la normativa relativa a la locación de servicios regulada por el entonces vigente Código Civil, causando consecuencias jurídicas, económicas y sociales que exceden el caso y que los magistrados no pueden ignorar, ya que repercuten sobre todo el sistema de contrataciones de profesionales (conf. voto del juez Lorenzetti en Fallos: 338:53, cuyas consideraciones –en lo pertinente– son aplicables en el *sub lite*) en razón de la incertidumbre que en él genera y la vulneración a la seguridad jurídica que significa desconocer un compromiso contractual voluntariamente asumido y ejecutado desde el inicio hasta su finalización bajo determinado régimen legal.

5°) Que en atención a las particularidades que presenta el sistema de contratación de profesionales para la atención médica debido a que los distintos tipos de vínculos –desde los de naturaleza autónoma hasta los de subordinación laboral– tienen como nota en común la prestación de servicios, es oportuno reiterar lo señalado por este Tribunal en cuanto a la exigencia que recae en los jueces de efectuar un minucioso

estudio de las características de la relación existente entre el profesional y la institución que brinda asistencia médica a los efectos de dar una correcta solución al litigio sometido a su decisión (conf. doctrina de Fallos: 323:2314). En efecto, la falta de un debido análisis de la cuestión atinente a la naturaleza del vínculo habido entre las partes, conduce a la subsunción del litigio en un marco jurídico que no responde a las constancias de la causa, lo que justifica la tacha de arbitrariedad (Fallos: 312:184 y 1831; 317:579).

6°) Que la sentencia impugnada prescinde de toda pauta hermenéutica objetiva para calificar el vínculo cuyo carácter está controvertido. Ello es así pues no se tuvo en cuenta el comportamiento de los integrantes de la relación contractual, elemento que constituye base cierta de interpretación a los fines de arribar a su correcto encuadre jurídico (conforme Fallos: 326:3043).

En el caso, el tribunal a quo indicó que la emisión de facturas por parte de la actora "constituía una modalidad de pago impuesta por la empleadora" (fs. 788). Sin embargo, el comportamiento de las partes a lo largo de varios años se opone a esta conclusión, máxime cuando en el sector de las profesiones liberales es una de las formas habituales de instrumentación de pago de los servicios autónomos contratados.

Efectivamente, la lectura del fallo revela que la alzada no ha reparado en diversos elementos probatorios con relevancia para la correcta calificación del vínculo, en particular, el informe elaborado por el perito contador, obrante a fs. 446/451 -ratificado a fs. 477-. En este el experto detalló



Corte Suprema de Justicia de la Nación

las facturas emitidas por la actora (desde el 23 de julio de 1999 hasta el 30 de octubre de 2008) correspondientes a las órdenes de pago liquidadas por el CEMIC, observándose que en algunos meses la actora llegaba a facturar hasta en tres ocasiones a la demandada; en todos los casos, los importes facturados difieren y la numeración de los recibos, de acuerdo con los datos volcados por el perito, no es correlativa (ver Anexo I, fs. 448/450). Esta mecánica de pago se ve corroborada por el testigo Juan Pablo Aldecoa –propuesto por la actora –, quien también se había desempeñado como médico oftalmólogo en el CEMIC quien declaró que concurría con su talonario de facturas a una sede administrativa de la aquí demandada, y contra la entrega de una de ellas se abonaban sus honorarios (fs. 398; y en sentido similar se manifestó la testigo Nora Merschoy Sánchez –fs. 396-).

En el referido "Detalle de pagos, conceptos facturados y descuentos", se expresan ítems como "Alquiler Saavedra", "Alquiler Talcahuano" y "Alquiler Belgrano" con motivo del uso que la actora hacía de los consultorios para la atención de pacientes en dichas sedes del CEMIC; según declaró el testigo Miguel Lizzano, el importe de ese alquiler era variable en razón de las horas de consultorio que tomaba la médica (fs. 455).

El mencionado peritaje contable permite verificar que bajo la misma modalidad de liquidación la demandada percibía una suma variable en concepto de "Derecho de quirófano" en función de la cantidad de veces que la actora requería su uso para intervenir quirúrgicamente en la sede Saavedra del CEMIC a

pacientes particulares; el pago de ese canon locativo es admitido por la actora (fs. 14 y 553). Se advierte que la información relativa a la facturación por el referido período reflejada en el informe pericial contable no fue objeto de impugnación (ver fs. 462/464; 481 y 485/486).

A lo expuesto cabe agregar que el tribunal a quo ha omitido considerar la constancia de inscripción de la actora ante la AFIP, cuya autenticidad aquella reconoció a fs. 311 vta., de la que surge -entre otros datos- que desde el 01-1984 está registrada en el régimen de trabajadores autónomos (fs. 221).

En ese documento figura como domicilio fiscal el de la calle Juncal 2345 piso 2 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que coincide con el del médico oftalmólogo Jorge Eduardo Acosta -según consta en el escrito de la actora de fs. 309 vta.-, que era uno de los profesionales que también operaban en la sede Saavedra del CEMIC (fs. 14). Con arreglo a la declaración de varios testigos, en ese domicilio se encontraba el consultorio particular de la actora (fs. 397 y 441); cuya existencia no fue desconocida por esta (conf. fs. 552). Además, la empresa de medicina prepaga OSDE Binario informó que "Evelina Zechner es prestadora de esta institución desde el 4/5/98 en la especialidad oftalmología" (fs. 382); Galeno Argentina, por su parte, contestó que la actora "se encuentra dentro de nuestra cartilla de prestadores, con vigencia el día 19/9/1988 hasta la actualidad" (fs. 389).

En este contexto, las circunstancias mencionadas y los elementos de prueba descriptos adquieren especial relevancia


Corte Suprema de Justicia de la Nación

para la solución de la controversia en atención a la conducta mantenida por las partes mientras duró la relación cuyo carácter la actora ahora controvierte, y no fueron valorados por el tribunal a quo.

7°) Que la conclusión a la que se arriba en la sentencia atacada lleva a la calificación de todos los servicios como dependientes, omitiendo las diferencias que hace el legislador, cuestión que fue analizada en el aludido voto de Fallos: 338:53.

La ley argentina disciplina al contrato de trabajo en la ley 20.744. Para ella el trabajo es una actividad que se presta en favor de quien tiene la facultad de dirigirla (art. 4° Ley de Contrato de Trabajo), y el objeto del contrato es "prestar servicios" bajo la dependencia de otra persona (art. 21 Ley de Contrato de Trabajo). A los fines de tipificar un vínculo como laboral es necesario precisar el concepto de dependencia, admitiéndose que esta presenta tres aspectos: jurídica, económica y técnica.


En el contrato laboral se trabaja por cuenta ajena, porque el beneficio que genera la actividad va al empresario y no al trabajador. Se sigue de ello la ajenidad de riesgos que son asumidos por el patrono, al contrario de la locación (art. 1630 del Código Civil entonces vigente). El trabajador percibe una retribución, con independencia de que el empleador gane o pierda en su actividad. Aquel "depende" de ese ingreso para su subsistencia. Por ello, aunque hay una gran variedad de remuneraciones que es posible pactar entre empleado y empleador (fija, variable, etc.), lo importante es la función económica de

la prestación dineraria. En el contrato laboral la obligación dineraria tiene una función retributiva, a la que la ley, además, le atribuye, como mínimo, la finalidad de asegurar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión (art. 116, ley 20.744). Esta causa económico-social es otro elemento que concurre a la tipificación del vínculo como dependiente.

En ese marco, los hechos objetivos y constancias existentes en el expediente detallados en el considerando anterior, analizados en su conjunto, no resultan compatibles con el desempeño de una relación de carácter laboral; por el contrario, se observan acordes al desarrollo de una vinculación en la que la actora asumió el riesgo económico propio de la autoorganización de su actividad profesional.

8°) Que, por otro lado, la sentencia recurrida califica como jurídicamente subordinada una relación que no es dependiente en ese sentido, confundiéndola con el control de la prestación, el cual está presente en una serie de contratos de colaboración, porque quien no puede hacer algo por sí mismo, lo delega en otro y lo controla.

En los vínculos de colaboración autónomos hay una intromisión o injerencia del titular del interés sobre quien realiza la colaboración y está destinada a precisar el objeto del encargo. Dicha injerencia es distinta de la dependencia laboral, ya que esta última no se limita al objeto del encargo pues alcanza al elemento personal, al trabajador, que está jurídicamente subordinado.



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Si se entiende que la sola verificación y control suponen un trabajo dirigido, podría llegarse a la inexacta conclusión de que la mayoría de las prestaciones médicas son dependientes, puesto que normalmente interviene una entidad -obra social, seguro de salud, empresa de medicina prepaga, clínica, hospital público, colegios profesionales- que ejerce un "control" sobre la prestación.

En virtud de estas consideraciones, tampoco está fundado en debida forma el pronunciamiento en cuanto concluyó que los dichos de algunos de los testigos con respecto a la elevación de notas al ya mencionado doctor Acosta -jefe del servicio de oftalmología de la demandada- comunicando cuándo cada profesional médico -incluida la actora- se tomaría su descanso vacacional, y que aquel sería quien confeccionaba la grilla con los horarios de atención a los pacientes, son elementos que darían cuenta de la subordinación de las decisiones de la actora a ciertas limitaciones por la demandada. En efecto, el tribunal *a quo* no examinó si ellas constituían una genuina manifestación del ejercicio del poder de dirección patronal o si, en cambio, eran consecuencia necesaria de la organización y funcionamiento del sistema médico-asistencial en el que la coordinación de horarios responde a razones operativas, y que fueron compartidas por la aquí reclamante sin que por ello, precisamente, se altere la naturaleza autónoma de los servicios comprometidos (conf. doctrina de Fallos: 323:2314 y 326:3043; votos del juez Lorenzetti en Fallos: 338:53 y 341:427, "Rica").

Por lo demás, si bien es propio del poder de

dirección del empleador el ejercicio de facultades disciplinarias, el trabajador autónomo no está sujeto a un régimen disciplinario en el sentido propio de la relación de trabajo (de las constancias de autos no surge que la actora estuviera sometida al poder sancionatorio de la demandada), aunque ello no descarta tampoco el sometimiento a un mínimo contralor que debe tener todo establecimiento que preste servicios a terceros.

9°) Que la resolución atacada tampoco considera la buena fe como deber jurídico que debe regir en toda relación contractual y conforme al cual deben conducirse cada una de las partes en razón de la confianza y expectativas que genera en el otro contratante con respecto a su cumplimiento bajo la modalidad legalmente prevista (Fallos: 341:427, voto del juez Lorenzetti).

La prestación que la actora aceptó voluntariamente desarrollar tuvo el mismo carácter durante los 23 años de relación con la entidad médica asistencial; aquella solo manifestó fehacientemente su desacuerdo con respecto a su naturaleza al momento en el que invocó la existencia de un supuesto vínculo de índole laboral no registrado. Este proceder es contrario a la regla de la buena fe al quebrantar la razonable expectativa de la institución de salud con la cual se vinculó durante años en una relación jurídica de servicios autónomos nacida del libre consenso de las partes y que con la plena conformidad de ellas le dieron cumplimiento por fuera del régimen jurídico del derecho laboral.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

10) Que, en las condiciones expuestas, corresponde descalificar el fallo recurrido por sus graves defectos de fundamentación que afectan en forma directa e inmediata las garantías constitucionales que se dicen vulneradas (art. 15 de la ley 48).

Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal subrogante, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Agréguese la queja al principal. Reintégrese el depósito de fs. 110 del recurso de hecho. Notifíquese y, oportunamente, remítase.



RICARDO LUIS LORENZETTI

DISI-//-

RICHARD LUIS FOREBETTI

Corte Suprema de Justicia de la Nación

-//-DENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON JUAN CARLOS
MAQUEDA Y DON HORACIO ROSATTI

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisibles (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal subrogante, se desestima la queja. Declárase perdido el depósito de fs. 110. Hágase saber y, previa devolución de los autos principales, archívese.



JUAN CARLOS MAQUEDA



HORACIO ROSATTI

Recurso de queja interpuesto por el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno, representado por la Dra. Adriana Rosana Minniti.

Tribunal de origen: Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo n° 17.